

MARÍA ELENA QUISPE E MÓNICA QUISPE

VS.

REPÚBLICA DE NAIRA

MEMORIAL DAS VÍTIMAS

ÍNDICE

1.1. Jurisprudência.....	4
1.1.1. Corte Interamericana de Direitos Humanos.....	4
1.1.2. Comissão Interamericana de Direitos Humanos.....	11
1.1.3. Corte Europeia de Direitos Humanos.....	12
1.1.4. Outros.....	12
2. DECLARAÇÃO DOS FATOS.....	14
2.1. Histórico da República de Naira.....	14
2.2. Da violência de gênero em Naira.....	14
2.3. Caso de María Elena Quispe.....	16
2.4. Da Base Militar Especial (BME).....	17
2.5. A apresentação do caso ao Sistema Interamericano.....	17
3. ANÁLISE LEGAL.....	18
3.1. Da competência da Corte IDH.....	18
3.1.1. Ratione materiae.....	18
3.1.2. Ratione temporis.....	20
3.1.3. Do princípio de Estoppel.....	21
3.2. Dos parâmetros da violência de gênero.....	22
3.2.1. Da violência sexual enquanto tortura.....	23
3.3. Proteção ao menor.....	26
3.4. Das violações à CADH e à CBP.....	26
3.4.1. Das violações aos artigos 4 e 5 (direito à vida e direito à integridade física).....	26
3.4.2. Da violação ao artigo 6 (proibição da escravidão e da servidão).....	27

3.4.3. Da violação ao artigo 19 (direitos da criança)	28
3.4.4. Da inconveniência da PTZVG em razão da impossibilidade de judicialização	29
3.4.5. Da violação ao artigo 7 (liberdade pessoal)	31
3.4.6. Da violação aos artigos 8 e 25 da CADH (garantia e proteção judicial) e 7 da CBP	32
3.4.6.1. Do acesso à justiça às mulheres indígenas.....	33
3.4.6.2. Da intervenção da jurisdição penal militar	34
3.4.6.3. Da obrigação de investigar.....	36
4. PETITÓRIO.....	40

1. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1.1. Jurisprudência

1.1.1. Corte Interamericana de Direitos Humanos

1.1.1.1. Casos contenciosos

- 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5/07/2004. Serie C No. 109;
- Acevedo Jaramillo e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7/02/2006. Série C Nº 144;
- Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26/09/2006. Serie C No. 154;
- Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22/09/2009. Serie C No. 202;
- Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5/08/2008. Serie C No. 182;
- Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20/11/14. Serie C No. 288;
- Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6/04/2006. Serie C No. 147;
- Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14/03/2001. Serie C No. 75;
- Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30/10/2008. Serie C No. 187;
- Blake vs Guatemala. Exceções Preliminares. Sentença de 2/07/1996. Série C Nº 27;

- Blake Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 24/01/1998. Serie C No. 36. Voto razonado del Juez A. A. Cançado Trindade;
- Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11/05/2007. Serie C No. 164;
- Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18/09/2003. Serie C No. 100;
- Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18/08/2000. Serie C No. 69;
- Caracazo Vs. Venezuela. Reparações e Custas. Sentença de 29/08/2002. Série C N° 95;
- Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30/01/1996. Serie C No. 24;
- Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4/09/1998. Serie C No. 41;
- Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30/05/1999. Serie C No. 52;
- Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 21/11/2007. Serie C No. 170;
- Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25/05/2010. Serie C No. 212;
- Cinco Pensionistas Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28/02/2003. Serie C No. 98;
- Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 16/08/2000. Serie C No. 68;
- Escher y otros Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6/07/2009. Serie C No. 200;

- Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4/07/2007. Serie C No. 165;
- Fairén Garbí y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26/06/1987. Serie C No. 2;
- Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30/08/2010. Serie C No. 215;
- Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31/08/2016. Serie C No. 315;
- Furlan y Familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31/08/2012;
- Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21/01/1994;
- Gangaram Panday Vs. Surinam, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4/12/1991. Serie C No. 12;
- García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25/11/2005. Serie C No. 137;
- Garibaldi Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23/09/2009. Série C Nº 203;
- Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29/01/1997. Serie C No. 30;
- Godínez Cruz vs. Honduras, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26/06/1987. Serie C No. 3;
- Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22/09/2006. Serie C No. 153;

- Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24/11/2010. Serie C No. 219;
- González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16/11/2009. Serie C No. 205;
- Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12/08/2008. Serie C No. 186;
- Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23/11/2004. Serie C No. 118;
- Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8/07/2004. Serie C No. 110;
- Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1/09/2016. Serie C No. 316;
- Hilaire, Constantine e Benjamin e outros. Sentença de 21/06/2002. Série C N° 94;
- Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3/03/2005. Serie C No. 121;
- Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs Bolívia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1/09/2010. Série C N° 217;
- Instituto de Reeducción del Menor Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2/09/2004. Serie C No. 112;
- Ivcher Bronstein. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6/02/2001. Serie C No. 74;
- J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27/11/2013. Serie C No. 275;

- Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3/04/2009. Serie C No. 196;
- La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29/11/2006. Serie C No. 162;
- Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6/12/2001. Serie C No. 90;
- Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27/11/1998. Serie C No. 42;
- Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25/11/2004. Serie C No. 119;
- Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26/05/2010. Serie C No. 213;
- Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11/05/2007. Serie C No. 163;
- Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24/11/2009. Serie C No. 211;
- Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sentencia de 15/09/2005. Serie C No. 134;
- Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31/01/2006. Serie C No. 140;
- Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19/11/2004. Serie C No. 116;
- Masacres de Ituango vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 1/07/2006, Serie C No. 148;
- Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4/09/2012 Serie C No. 250;

- Montero Aranguren e outros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 5/06/2006. Série C N° 150;
- Neira Alegría y otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de 11/12/1991. Serie C No. 13;
- Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19/11/1999. Serie C No. 63;
- Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29/05/2014. Serie C No. 279;
- Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22/11/2005. Serie C No. 135;
- Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25/11/2006. Serie C N° 160;
- Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28/01/2009. Serie C No. 195;
- Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23/11/2009. Serie C No. 209;
- Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28/01/2009. Serie C No. 194;
- Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31/08/2010. Serie C No. 216;
- Ruano Torres y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5/10/2015. Serie C No. 303;

- Servellón García Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21/09/2006. Serie C No. 152;
- Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12/11/1997. Serie C No. 35;
- Tiu Tojín vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26/11/2008, Serie C No. 190;
- Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26/08/2011. Serie C No. 229;
- Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27/01/2009. Serie C No. 193;
- Usón Ramírez Vs. Venezuela. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 20/11/2009. Série C Nº 207;
- Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26/06/1987. Serie C No. 1;
- Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29/07/1988. Serie C No. 4;
- Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19/05/2014. Serie C No. 277;
- Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4/07/2006. Serie C No. 149;
- Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6/05/2008. Serie C No. 180.

1.1.1.2. Opiniões Consultivas

- Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17;

- Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9.

1.1.2. Comissão Interamericana de Direitos Humanos

1.1.2.1. Informes de Admissibilidade

- Informe No. 13/08 de 5/03/2008 (admisibilidad), Petición No. 844/05, Caso Comunidad de Río Negro del Pueblo Indígena Maya y sus miembros (Guatemala);
- Informe No. 15/09 de 19/03/2009 (admisibilidad), Petición No. 1/06, Caso Masacre y desplazamiento forzado de los Montes de María (Colombia).

1.1.2.2. Informes de Mérito

- Informe de Fondo n° 5/96, Caso 10.970, Raquel Martín de Mejía vs. Perú, 1/03/1996;
- Informe de Fondo N° 53/01, Caso 11.565, Ana, Beatriz, y Cecilia González Pérez (México), 2/04/2001.

1.1.2.3. Informes Temáticos

- Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 65, 28/12/2011;
- Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20/01/2007;
- Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica, OEA Ser.L/V/II. Doc. 63, 9/12/2011;

- Comunidades cautivas: Situación del Pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia, documento de la Organización de los Estados Americanos OEA/Ser.L/V/II, Doc. 58 de 24/12/2009;
- Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, Canadá, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30/14, 21/12/2014.

1.1.3. Corte Europeia de Direitos Humanos

- Aydin v. Turkey (GC), Julgamento de 25/09/1997, App nº 57/1996/676/866;
- L.C.B. v. the United Kingdom, Julgamento de 8/06/1998, App. nº 14/1997/798/1001;
- M.C. v. Bulgaria, Julgamento de 4/12/2003, App. nº. 39272/98.

1.1.4. Outros

1.1.4.1. Organização das Nações Unidas

- Case V.L. v. Switzerland, Decision of 22 January 2007, U.N. Doc. CAT/C/37/D/262/2005;
- Naciones Unidas, Comité de la CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Guatemala, CEDAW/C/HON/CO/6, 12/02/2007;
- Naciones Unidas, Comité de la CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Honduras, CEDAW/C/HON/CO/6, 10/08/2007;

- Naciones Unidas, Comité de la CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Argentina, CEDAW/C/ARG/CO/6, 16/08/2010.

2. DECLARAÇÃO DOS FATOS

2.1. Histórico da República de Naira

1. Naira é uma democracia que tem, em seu histórico, violações aos direitos humanos perpetradas por ações terroristas e omitidas pelas autoridades estatais. Possui um cenário político conturbado. Atualmente, o Poder Legislativo faz oposição às normativas que visam alcançar a inclusão e melhoria das condições de grupos vulneráveis.

2. O Estado é membro da ONU e da OEA, e ratificou todos os documentos internacionais de proteção aos direitos humanos.

2.2. Da violência de gênero em Naira

3. O grupo BPL, iniciou uma série de ataques terroristas no sul do país. Para combater essas ações, entre 1980 e 1999, o Estado: estabeleceu seu estado de emergência, suspendeu garantias e criou as BMEs.

4. Todavia, as referidas BME, em verdade, trouxeram mais violações aos direitos humanos dos civis do Estado de Naira e, principalmente, aos direitos das mulheres, deixando cristalina a existência de uma sistemática e costumeira violência de gênero. Infelizmente, as denúncias quanto a essas ocorrências nunca foram adiante, sendo tais fatos considerados meramente como parte da história do país. Destarte, a ONG Killapura vem documentando e enfrentando as referidas violações, demonstrando que o Estado não se empenha no combate à violência de gênero.

5. Os casos de Zuleimy Pareja e Analía Pareja são os mais recentes no que tange a violência de gênero e que sensibilizaram a população.

6. Zuleimy, mulher transgênero, por anos, foi violentada por seu companheiro, Angelino Mendonza. As agressões foram denunciadas e, em 2010, enquanto aguardava o julgamento, Zuleimy Pareja, foi assassinada por seu ex-companheiro e enterrada em campo aberto. Sr. Mendonza foi denunciado por feminicídio e à condenação de 40 anos de prisão. Entretanto, a justiça de primeira instância não reconheceu a prática do delito, baseando-se na inexistência de cirurgia de mudança de sexo da vítima e seu nome masculino na carteira de identidade. Assim, aplicou-se a pena de 15 anos por homicídio, com decisão confirmada pela Suprema Corte.

7. Analia Sarmiento, jovem, 19 anos, desapareceu e teve seu corpo encontrado em um depósito de lixo. Constatou-se que Guillermo Alcázar tentou beijar a vítima à força e, em seguida, a estuprou e matou. Alcázar foi acusado duas vezes e condenado por estupro, estando em liberdade condicional à época dos fatos.

8. Neste contexto, Naira decidiu adotar medidas como: i) implementação da PTZVG; ii) treinamento e formação obrigatória para funcionários por meio da UVG; iii) rever a legislação concernente à violência de gênero, iv) criar um PARG, no qual irá oferecer assistência especial para vítimas de violência de gênero.

9. Em que pese a existência das Leis 25253 e 19198, as pesquisas demonstram o cenário discriminatório enraizado em Naira. Segundo dados do Ministério Público, por mês, ocorrem em Naira cerca de 10 feminicídios, tentados ou consumados, e a cada duas horas uma mulher é vítima de violência sexual. Ademais, em 2016, constatou-se que 03 em cada 05 mulheres sofreram agressões de seus parceiros ou ex parceiros. Por conseguinte, a discriminação contra a condição feminina também se estende aos direitos econômicos. O Ministério do Trabalho relatou que a diferença salarial entre homens e mulheres é de 16% no setor público e 29% no setor

privado, e também apontou que as mulheres dedicam 50% do seu tempo em trabalhos não remunerados.

10. Outrossim, preconceito atinge a população LGBT que, por vezes, é vítima de crimes de ódio e tem seu tolhido o direito de se casarem com pessoa do mesmo sexo e, consequentemente, a adoção de crianças por esses casais.

2.3. Caso de María Elena Quispe

11. No dia 20 de janeiro de 2014, Maria Elena Quispe noticiou à Polícia que seu marido, Jorge Pérez, a desfigurou utilizando o bico de uma garrafa, ocasião em que o mesmo não foi denunciado pelo Ministério Público em razão da ausência de atestado médico. Naquela oportunidade, o único médico legista da zona estava viajando, o que obstou a investigação do agressor.

12. Após quatro meses, Jorge Pérez interceptou a senhora Quispe na rua, onde a insultou e agrediu em plena via pública. Diante de uma pressão nacional, as forças estatais detiveram o agressor e o submeteram a julgamento.

13. Contudo, Pérez foi condenado apenas a um ano de prisão e, por não possuir antecedentes de crimes de violência e considerando que o médico legista classificou as lesões como leves, teve sua pena suspensa, permanecendo em liberdade. Depois de três meses, o agressor foi até o local de trabalho da senhora Quispe onde lá a agrediu uma vez mais, provocando sua invalidez parcial, ao passo que, a despeito da interposição da denúncia, até o presente momento continua pendente o processo judicial.

14. Mônica Quispe, em razão das periódicas agressões sofridas por sua irmã, interpôs denúncia no momento dos fatos, em 2014, cujo processo segue até o presente momento, pendente de julgamento.

15. Assim, Mônica passou a cuidar do sobrinho, filho da vítima e, por conseguinte, pleiteou a sua custódia, uma vez que o genitor/agressor, Sr. Pérez, demonstrou interesse de assumir a criação do filho por argumentar insuficiência de sanidade da Sra. Maria Elena e de que ele estaria arrependido do que cometera. Não obstante, o Juízo de Família em primeira instância concedeu a guarda do menor ao genitor, motivada no vínculo paterno existente entre eles.

2.4. Da Base Militar Especial (BME)

16. O caso de Maria Elena Quispe, ganhou notoriedade nacional e levou a Sra. Mónica a conceder uma entrevista ao canal GTV, onde relatou as dificuldades enfrentadas por ela e a irmã, bem como as violências sexuais, os trabalhos forçados que sofreram na BME de Warmi.

17. As autoridades refutaram as alegações, sendo apoiados pela população. Contudo, Killapura apurou os fatos e interpôs denúncia frente aos atos de violência sexual sofrida pelas irmãs Quispe, mas encontrou óbice no prazo prescricional de 15 anos. Inobstante, o governo foi intimado a se manifestar e viabilizar a judicialização e investigação dos casos de violência sexual sofrida pelas mulheres, bem como a reparação das crianças que porventura fossem fruto desses abusos.

2.5. A apresentação do caso ao Sistema Interamericano

18. A ONG Killapura, inconformada com as medidas oferecidas pelo governo, posto que o caso das irmãs Quispe denuncia a generalidade da violência de gênero e de que o Estado não

possui amparo jurídico, apresentou petição, em 10 de maio de 2016, à CIDH, alegando violações dos artigos 4, 5, 6, 7, 8 e 25, em relação a Maria Elena e Mônica Quispe, todos em relação às obrigações do 1.1 da CADH, bem como ao artigo 7 da CBP.

19. O Estado afastou a possibilidade de um procedimento de solução amistosa, tendo apresentado, unicamente, as ações que iniciou em favor das vítimas e mulheres em geral. Diante da resposta do Estado, a CIDH considerou o caso admissível e encaminhou o caso à Corte IDH, por violações aos artigos 4, 5, 6, 7, 8 e 25 em relação ao 1.1, bem como ao artigo 7 da CBP.

3. ANÁLISE LEGAL

3.1. Da competência da Corte IDH

3.1.1. Ratione materiae

20. Um Estado parte na CADH só pode ser julgado perante esta honorável Corte IDH quando das violações que sobrevierem a ratificação da competência contenciosa.¹ Sendo assim, esta Corte é competente para apreciar a demanda na medida em que o Estado de Naira se submeteu a sua jurisdição em 1979², e as violações de que se tratam a denúncia apresentada perante a CIDH ocorreram a partir de março de 1992.

21. Inconteste também que se aplica aos fatos dos quais são narrados na petição perante a CIDH a CIPPT, visto que a ratificação de tal instrumento interamericano se deu em 1 de janeiro de 1992.

¹ Ct.IDH. "Guerrilha do Araguaia" Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, par. 16.

² Pergunta de esclarecimento 5.

22. É permitido à Corte IDH que se conheça tanto violações à CADH como de outros instrumentos interamericanos³ que lhe concedem esta competência, como é o caso da CBP⁴.

23. Não obstante, ficou assentado que o caso deveria ser analisado por três diferentes interpretações: a literal, a sistemática e a teleológica⁵, todas com fundamento nos artigos 31 e 32 da CVDT, possibilidade já ratificada pelos parâmetros interpretativos no SIDH⁶.

24. A interpretação literal realizada pelo Estado era equivocada, uma vez que ignorava a segunda parte do referido dispositivo, qual menciona “devendo a Comissão considerar tais petições de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos [...]”⁷. Deste modo, a CIDH tem o dever de submeter o caso à Corte IDH para julgamento, caso não se cumpra as determinações do informe de mérito.

25. Em sede de interpretação sistemática, embora o artigo 11 da CBP estabeleça que a Corte IDH tem competência consultiva sobre referido tratado, trata-se de um silêncio eloquente, na medida em que a competência contenciosa da Corte IDH já fica definida pela própria CADH, inexistindo necessidade de reafirmá-la.⁸

26. Por fim, quanto à interpretação teleológica, os tratados internacionais de direitos humanos têm a finalidade de proteção e ampliação dos direitos expressos na CADH. Assim, a CBP vai além. Ela cria um sistema de petições individual, reforçando as garantias judiciais e o direito de petição criado pelo SIDH, raciocínio do artigo 12 da CBP não excetuar de sua aplicação

³ Ct.IDH. Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C Nº 160, par. 276

⁴ Ct.IDH. “Campo Algodonero” Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205, par. 37

⁵ Ct.IDH. “Campo Algodonero” Vs. México, supra nota 4, par. 77

⁶ Ct.IDH. Blake vs. Guatemala. Fondo. Voto razonado del Juez A. A. Cançado Trindade, par. 19

⁷ Ct.IDH. “Campo Algodonero” Vs. México. Supra nota 4, par. 40

⁸ Ct.IDH. “Campo Algodonero” Vs. México., supra nota 4, par. 77

nenhuma das normas e requisitos de procedimento para as comunicações individuais, de modo que existem, a partir desta decisão, quatro espécies de tratados: a) os que encontram-se fora do SIDH e são meramente interpretativos; b) os que encontram-se fora do SIDH e possuem sistema de petição individual; c) os que encontram-se dentro do SIDH e são meramente interpretativos; e d) os que encontram-se dentro do SIDH e que criam sistema de petição individual, sendo que neste último encontra-se a CBP.

27. Desta forma, é possível — e se requer desta Eminente Corte IDH que assim o faça — a análise da responsabilidade do Estado de Naira pelo descumprimento da CBP.

3.1.2. *Ratione temporis*

28. A CBP é aplicada ao presente caso mesmo ratificada posteriormente a data dos fatos⁹, uma vez que especificam e complementam as obrigações que tem o Estado com respeito ao cumprimento dos direitos consagrados na CADH, assim como pelo *corpus juris* internacional em matéria de proteção a integridade pessoal¹⁰.

29. No que tange à aplicação de normas do Direito Internacional dos Direitos Humanos no tempo, existem algumas situações, obrigações ou violações que possuem caráter continuado ou permanente, ou seja, tais situações continuadas se protraem no tempo¹¹, como é o caso do desaparecimento forçado ou obrigações impostas aos Estados pela CADH que deles exijam uma conduta comissiva, ativa, para a efetivação de determinados direitos¹².

⁹ Ct.IDH. Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, supra nota 27, par. 377

¹⁰ Ct.IDH. Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, supra nota 27, pars. 276, 377 e 379.

¹¹ CtIDH. Blake vs. Guatemala. Fondo. Voto razonado del Juez A. A. Cançado Trindade, par. 7

¹² CtIDH. Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, par. 67; CtIDH. Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, par. 45; CtIDH. "Guerrilha do Araguaia" Vs. Brasil. Supra nota 1, par. 17

30. Discute-se nesta demanda justamente o dever de indenizar as vítimas, investigar, identificar e punir os agentes estatais responsáveis por graves violações de direitos humanos, e o dever de reestabelecer a verdade, todas sob a perspectiva da violência de gênero, ou seja, obrigações de caráter continuado e que, portanto, se protraem no tempo até seu efetivo cumprimento¹³, no momento em que a República de Naira ratificou a CBP tais obrigações, contidas no artigo 7, ainda perduravam, assim sendo, resta inaplicável a exceção *ratione temporis* ao presente caso.

3.1.3. Do princípio de Estoppel

31. O princípio de estoppel se caracteriza pela vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*) em âmbito internacional, o que proíbe o Estado de se comportar de modo contrário à sua conduta anterior¹⁴.

32. Destarte, qualquer objeção preliminar deve, necessariamente, ser apresentada durante o procedimento de análise de admissibilidade perante a CIDH, de modo que, se apresentada somente perante a Corte IDH, considerar-se-á uma desistência tácita ou expressa daquela objeção¹⁵.

¹³ CtIDH. Caso Blake vs Guatemala. Exceções Preliminares. Sentença de 2 de julho de 1996. Série C Nº 27, pars. 39 e 40; CtIDH. Caso Radilla Pacheco vs México. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23 de novembro de 2009. Série C Nº 209, par. 23; CtIDH. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs Bolívia. Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 1o de setembro de 2010. Série C Nº 217, par. 21; CtIDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, par. 48

¹⁴ CtIDH. Caso Acevedo Jaramillo e outros Vs. Peru. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 7 de fevereiro de 2006. Série C Nº 144, par. 177

¹⁵ CtIDH. Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, par. 88; Ct.IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, par. 87; Ct.IDH. Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 3, par. 90; Ct.IDH. Caso Gangaram Panday, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de diciembre de 1991. Serie C No. 12, par. 38; Ct.IDH. Caso Neira Alegria y otros, 11 Excepciones Preliminares, Sentencia de 11 de diciembre de 1991. Serie C No. 13, par. 30; Ct.IDH. Caso Castillo Páez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996. Serie C No. 24, par. 40

33. Uma vez que os representantes do Estado alegaram apenas exceção preliminar sobre a falta de competência *ratione temporis* da Corte IDH¹⁶ durante o trâmite perante CIDH, se furtando de apresentar outras exceções preliminares no momento oportuno, quaisquer novas alegações deste caráter são inadmissíveis em virtude do princípio de estoppel, em conformidade com a jurisprudência¹⁷ desta Corte e do Direito Internacional¹⁸.

3.2. Dos parâmetros da violência de gênero

34. A despeito das barbáries perpetradas pelos agentes estatais durante os anos de 1970 a 1999 terem sido deflagradas em desfavor de homens, crianças e mulheres¹⁹, há de se sinalizar que durante o conflito armado as mulheres foram particularmente selecionadas como vítimas de violência sexual, de modo que, se executadas em contexto de massacres, como no presente caso, destinam-se a destruir a dignidade da mulher a nível i) cultural, ii) social, iii) familiar e iv) individual²⁰. Ademais, a definição de discriminação contra a mulher inclui a violência baseada no sexo, isto é, a violência dirigida contra a mulher porque i) é mulher ou ii) por afetá-la de forma desproporcional, de modo que a impede gravemente de gozar dos direitos e liberdades em igualdade com homens²¹.

¹⁶ Pergunta de esclarecimento 7

¹⁷ Ct.IDH. Caso do Caracazo Vs. Venezuela. Reparaciones e Custas. Sentença de 29 de agosto de 2002. Série C Nº 95, par. 52; Caso do Massacre de La Rochela, pars. 46 e 48, nota 42 supra, e Caso Montero Aranguren e outros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Exceção Preliminar, Mérito, Reparaciones e Custas. Sentença de 5 de junho de 2006. Série C Nº 150, par. 49

¹⁸ Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), I.C.J. Reports 1994, sentença de 3 fevereiro de 1994, pars. 56, 68, 75; Nuclear Tests (Australia v. France), I.C.J. Reports 1974, sentença de 20 de dezembro de 1974, pars. 42-46, e Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), I.C.J. Reports 1962, sentença de 15 de junho de 1962, par. 32

¹⁹ Pergunta de esclarecimento 50

²⁰ Ct.IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, supra nota 143, par. 49.19

²¹ Ct.IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, supra nota 21, par. 395

3.2.1. Da violência sexual enquanto tortura

35. A violência sexual desferida em face das irmãs Quispe constituem tortura²². Seguindo o entendimento da CIDH²³, a Corte IDH qualifica a violência sexual cometida por agentes estatais como uma forma de tortura²⁴, ainda que praticada com sua anuência ou tolerância, cumpridos os seguintes requisitos: i) haja sido intencional; ii) cause severo sofrimento físico ou mental, e iii) tenha sido praticado com determinado fim ou propósito.²⁵ Outrossim, configura-se o ato de tortura ainda que praticado fora das instalações estatais.²⁶

36. O sofrimento severo à vítima deve ser considerado inerente à prática da violência sexual, ainda que não exista prova de lesões ou enfermidades físicas.²⁷ Assim, são inadmissíveis as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade que impeçam a investigação e sanção dos responsáveis das violações graves dos direitos humanos²⁸, tais como a tortura, uma vez que são proibidas por contrariarem direitos inderrogáveis reconhecidos pelo

²² Ct.IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, par. 79

²³ CIDH, Informe de Fondo N° 53/01, Caso 11.565, *Ana, Beatriz, y Cecilia González Pérez* (México), 2 de abril de 2001, párrs. 47-49

²⁴ Ct.IDH, Caso Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, supra nota 3, par. 312. CIDH. Caso Raquel Martín de Mejía vs. Perú, Informe No 5/96, fondo, Caso 10.970, 1 de marzo de 1996; Caso Ana Beatriz y Celia González Pérez vc. México, Informe No 53/01, fondo, Caso 11.565, 4 de abril de 2001.

²⁵ Ct.IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215, par. 120; Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, par. 110.

²⁶ Ct.IDH. Caso Fernández Ortega vs. México, supra nota 26, par. 128; Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26, par. 118.

²⁷ Ct.IDH. Caso Fernández Ortega vs. México, supra nota 26, par. 124; Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26, par. 114.

²⁸ Ct.IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, par. 128; Ct.IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, par. 132; Ct.IDH. Ct.IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, par. 59.

Direito Internacional dos Direitos Humanos²⁹, isto é, são imprescritíveis³⁰ e constituem *jus cogen*³¹.

37. Assim, a tortura é um crime imprescritível e que, por si só, já enseja a investigação, identificação e punição dos responsáveis por tais graves violações de direitos humanos.³² Soma-se a isso o fato do Estado de Naira ter ratificado, em 1 de janeiro de 1992, a CIPPT³³, de modo que as barbáries perpetradas em face das irmãs Quispe estão abarcadas em virtude da Convenção ter sido ratificada.

38. As graves violações de direitos humanos devem ser investigadas e seus responsáveis punidos, acima de qualquer justificativa de prescrição de suas condutas, ainda que em detrimento da irretroatividade da lei penal, o que não ocorreu no caso das irmãs Quispe.

3.2.1.1. Intencionalidade

39. Com respeito a existência de um ato intencional, de acordo com a provas, as irmãs Quispe foram abusadas sexualmente, em mais de uma ocasião, muitas vezes de forma coletiva, por oficiais das BME durante o mês que permaneceram sob sua custódia.

3.2.1.2. Sofrimento físico ou mental severo

40. Ao sopesar o sofrimento suportado pela vítima, esta Corte deve analisar as condições específicas de cada caso³⁴, como as características do tratamento e pessoais³⁵. Assim, por

²⁹ Ct.IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, par. 41.

³⁰ Ct.IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, supra nota 15, pars. 99, 105 e 106.

³¹ CVDT. Artigo 53.

³² Ct.IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, supra nota 14, par. 141.

³³ Pergunta de esclarecimento 19.

³⁴ Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26, par. 112.

³⁵ Ct.IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, par. 74; Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, par. 83.

pressuposto, a violência sexual, por si só, produz um trauma insuperável com o tempo, e distinto de todos os outros, em virtude da humilhação física e emocional³⁶.

41. No presente caso as irmãs Quispe estiveram submetidas a um ato de violência e controle físico dos militares que delas abusaram sexualmente. Ademais, a coerção dos imprimida pelos agentes em detrimento da vulnerabilidade das vítimas, resultou nos atos sexuais involuntários, sentimento que se agravou pelo fato, de muitas vezes, terem sido submetidas ao estupro coletivo, na presença de outras vítimas e militares.

3.2.1.3. Finalidade

42. Desta feita, em decorrência do poder estar centralizado nos militares à época dos fatos, sobretudo em Warmi, a população encontrava-se em posição de total subordinação³⁷ perante eles. As vítimas estavam detidas por terem sido acusadas de serem cúmplices de um grupo armado e por entregar-lhes informação sobre a BME, de modo que, sem descartar eventual ocorrência de outras finalidades, considera-se que as violações sexuais se deram com a finalidade específica de castigo em decorrência da suposta relação das vítimas com grupos armados, o que já ficou sedimentado por esta Corte em caso semelhante³⁸.

43. Portanto, deve ser considerado que a violação sexual contra as irmãs Quispe vulnerou valores e aspectos essenciais a sua vida privada, anulando seu direito de liberdade sexual e decisão sobre funções corporais básicas³⁹, sendo intolerável a sua não judicialização.

³⁶ Ct.IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 3, par. 311. Cf. ECHR, Case of Aydin v. Turkey (GC), par. 83.

³⁷ Pergunta de esclarecimento 12.

³⁸ Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26, par. 117.

³⁹ ECHR, Case of M.C. v. Bulgaria, Judgment of 4 December 2003, App. No. 39272/98, par. 150, e ICTY, Case of Mucic et. al. “Celebici Camp”. Judgment of November 16, 1998. Case No. IT-96-21-T, par. 492.

3.3. Proteção ao menor

44. O Estado deve se orientar pelo interesse superior da criança⁴⁰, observando a sua particular vulnerabilidade⁴¹.

45. Deve-se entender esta a disposição do artigo 19 da CADH, que protege o direito da criança, como um direito complementar, que o tratado estabelece para pessoas que, por seu desenvolvimento físico e emocional, necessitam de proteção especial⁴². E, portanto, violações à menores se reveste de especial gravidade⁴³.

3.4. Das violações à CADH e à CBP

3.4.1. Das violações aos artigos 4 e 5 (direito à vida e direito à integridade física)

46. O direito à vida que toda pessoa física detém é condição prévia necessária para a realização e desfrute de todos os demais direitos⁴⁴. Por sua vez, a integridade pessoal está diretamente vinculada a dignidade da pessoa humana, de modo que as formas de afetação são variadas e muitas delas evidentes⁴⁵.

47. É direito dos presos de viver em condições de detenção compatíveis com sua dignidade pessoal tendo seus direitos à vida e à integridade pessoal assegurados⁴⁶.

⁴⁰ Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 56, 59 y 60; Caso Servellón García Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, par. 116; Caso Chitay Nech y otros, supra nota 25, par. 164.

⁴¹ Cf. Caso De la Masacre de Las Dos Erres, supra nota 14, par. 184, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, par. 164.

⁴² Condição Jurídica e Direitos Humanos das Crianças, par. 54; Ct.IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, par. 164.

⁴³ Ct.IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, par. 133.

⁴⁴ Ct.IDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, par. 124; Ct.IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Supra nota 37, par. 144.

⁴⁵ Ct.IDH. Caso Castillo Páez, supra nota 16, par. 66.

⁴⁶ Ct.IDH. Caso "Instituto de Reeducação del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, par. 151; Ct.IDH. Caso Bulacio Vs.

48. As condições a que foram submetidas as vítimas vão além do total desprezo, haja vista que os agentes estatais responsáveis pela guarnição das BMEs eram aqueles que violaram os direitos de seus tutelados⁴⁷.

49. Pode-se aferir que o direito à vida comporta: (i) obrigação positiva, no sentido de que o Estado deve agir na intenção de proteger o direito compreendido no artigo 4 da CADH; (ii) obrigação negativa, atinente ao dever de se abster de violar a vida e a dignidade de seus jurisdicionados⁴⁸. O que não ocorreu na presente demanda.

50. Assim, o sentimento de temor pela presença dos militares, bem como a intangível tarefa de denunciar aos próprios militares – detentores dos poderes político e judicial⁴⁹, os fatos de violência sexual e trabalhos forçados aos quais foram submetidas se depreende que sua integridade física foi afetada, a ensejar a responsabilidade internacional do Estado de Naira pelas violações aos artigos 4 e 5 da CADH.

3.4.2. Da violação ao artigo 6 (proibição da escravidão e da servidão)

51. Os direitos a não ser submetido à escravidão constituem *jus cogens*⁵⁰. Ademais, a escravidão ou o trabalho forçado, praticados por funcionários públicos⁵¹ ou particulares⁵²,

Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, pars. 126 e 138, ; Caso Hilaire, Constantine e Benjamin e outros. Sentença de 21 de junho de 2002. Série C N° 94, par. 165; Caso Cantoral Benavides. Sentença de 18 de agosto de 2000. Série C N° 69, par. 87.

⁴⁷ Parágrafo 28 do caso hipotético.

⁴⁸ Ct.IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, par. 84; Ct.IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, par. 120; Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, par. 232; Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, par. 66. ECHR, L.C.B. v. the United Kingdom, Judgment of 8 June 1998, par. 36.

⁴⁹ Pergunta de esclarecimento 40.

⁵⁰ CIDH, Comunidades cautivas: Situación del Pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia, documento de la Organización de los Estados Americanos OEA/Ser.L/V/II, Doc. 58 de 24 diciembre 2009, par. 54.

⁵¹ Informe No. 15/09 de 19 de marzo de 2009 (admisibilidad), Petición No. 1/06, Caso Masacre y desplazamiento forzado de los Montes de María (Colombia), par. 65.

também representa delito penal internacional, independentemente de o Estado ter ratificado ou não convenções internacionais que proíbam essas práticas⁵³. Por sua vez, o trabalho forçado está caracterizado quando: i) o trabalho ou serviço se exige sob ameaça de uma pena e ii) se executaram involuntariamente⁵⁴.

52. No presente caso, vislumbra-se que as irmãs Quispe foram submetidas, durante um mês, i) sob coação⁵⁵, pelos militares, à prática de trabalhos forçados, como lavar, cozinhar e limpar a BME⁵⁶, de modo ii) involuntário, isto é, sem que houvesse consentimento ao início e à continuação dos trabalhos, de modo a requer-se a responsabilização do Estado de Naira pela violação ao artigo 6 da CADH em virtude de ter submetido as irmãs Quispe ao trabalho forçado, tal qual no caso *Masacres de Ituango vs. Colômbia*⁵⁷.

3.4.3. Da violação ao artigo 19 (direitos da criança)

64. Ademais, as violações, em desfavor de menores, revestem-se de especial gravidade, pois seus direitos se encontraram protegidos não só pela CADH, senão em inúmeros instrumentos internacionais aceitos pela comunidade internacional, entre os quais se destaca a CDC, que determina ao Estado o dever de adotar medidas especiais de proteção e assistência em favor das

⁵² Informe No. 13/08 de 5 de marzo de 2008 (admisibilidad), Petición No. 844/05, Caso Comunidad de Río Negro del Pueblo Indígena Maya y sus miembros (Guatemala), par. 96.

⁵³ CIDH, Comunidades cautivas: Situación del Pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia, documento de la Organización de los Estados Americanos OEA/Ser.L/V/II, Doc. 58 de 24 diciembre 2009, par. 54.

⁵⁴ Ct.IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, Serie C No. 148, par. 160.

⁵⁵ Pergunta de esclarecimento 50.

⁵⁶ Pergunta de esclarecimento 50 e par. 28 do Caso Hipotético.

⁵⁷ Ct.IDH. Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia. supra nota 58, par. 426, punto resolutive 4.

crianças sob sua jurisdição, visto que necessitavam de proteção especial.⁵⁸ Assim, sendo menores⁵⁹, consubstancia-se violação a proteção deficiente das vítimas.

3.4.4. Da inconveniência da PTZVG em razão da impossibilidade de judicialização

65. A violência sexual a qual foi submetida as irmãs Quispe não produz prova⁶⁰, necessariamente, uma vez que podem se dar na ausência de outras pessoas, tampouco há de se esperar provas documentais e gráficas, de modo que o testemunho das vítimas constitui prova fundamental do fato, além de ser levado em consideração o trauma causado à vítima⁶¹, o que tem severas consequências e causa um grande dano físico e psicológico, situação dificilmente superada pelo tempo⁶².

66. Ademais, as violações sexuais correspondem a um tipo de delito que as vítimas geralmente não denunciam⁶³, o que se intensifica pelo fato das irmãs Quispe pertencerem a comunidade indígena⁶⁴, por particularidades tanto culturais como sociais que a vítima tem de enfrentar, assim como pelo medo, inclusive pela rejeição por parte de sua comunidade⁶⁵.

67. Impera realizar uma análise probatória, a fim de corroborar com as alegações, de modo que as BME eram presentes à época dos fatos, sendo legítimo o uso de prova circunstancial, os indícios e as presunções para fundamentar uma sentença⁶⁶, sempre que isso possa inferir

⁵⁸ Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú, supra nota 45, par. 164. Parecer Consultivo OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Série A N° 17, par. 54.

⁵⁹ Condição Jurídica e Direitos Humanos das Crianças. Parecer Consultivo OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Série A N° 17, par. 54.

⁶⁰ Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26 par. 89.

⁶¹ Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26 par. 91.

⁶² Ct.IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 3, par. 311; ECHR, Case of Aydin v. Turkey (GC), supra nota 99, par. 83.

⁶³ Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26 par. 95.

⁶⁴ Pergunta de esclarecimento 16.

⁶⁵ Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26 par. 70.

⁶⁶ Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26 par. 102; Ct.IDH. Caso Escher e outros vs. Brasil, párr. 127; Caso Manuel Cepeda Vargas, par. 66.

conclusões consistentes sobre os fatos⁶⁷, diferenciando-se direito penal interno e processo de violação de direitos humanos⁶⁸.

68. Apesar de transcorrido longo prazo desde os fatos, as vítimas não receberam nenhuma reparação⁶⁹ e deve se considerar razoável outorgar valor as provas e a série de indícios que surgem sobre a existência de violência sexual por parte dos militares contra as irmãs Quispe – para um tribunal internacional os critérios de valoração da prova são menos formais que os sistemas legais internos⁷⁰, pois, concluir o contrário, implicaria permitir ao Estado amparar-se na negligência e inefetividade da investigação penal⁷¹.

69. Mesmo diante da inexistência de provas materiais, deve-se considerar sofrimento severo à vítima de uma violência sexual.⁷² Destarte, não devem prosperar quaisquer alegações de prescrição ou de excludente de responsabilidade que propensas a obstar as ações de investigação e sanção dos responsáveis pelas graves violações aos direitos humanos⁷³, tais como a tortura, visto que são proibidas por contrariarem direitos inderrogáveis reconhecidos pelo Direito

⁶⁷ Ct.IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 76, par. 127; Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, par. 66.

⁶⁸ Ct.IDH. Escher y otros, supra nota 76, párr. 127, y Caso Radilla Pacheco, supra nota 14, par. 89.

⁶⁹ Pergunta de esclarecimento 67.

⁷⁰ Ct.IDH. Caso Velásquez Rodríguez. Fondo, supra nota 16, par. 135; Caso Escher y otros, supra nota 76, par. 128.

⁷¹ Ct.IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, par. 97.

⁷² Ct.IDH. Caso Fernández Ortega vs. México, supra nota 27, par. 124; Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, supra nota 26, par. 114.

⁷³ Ct.IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, par. 128; Ct.IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, par. 132, Ct.IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, par. 59.

Internacional dos Direitos Humanos⁷⁴, isto é, são normas *ius cogens* e, portanto, como tratando-se de lesão à humanidade não é sofre os efeitos da prescrição.⁷⁵

70. Assim, a tortura é um crime imprescritível e que, por si só, já enseja a investigação, identificação e punição dos responsáveis.⁷⁶ Soma-se a isso o fato do Estado de Naira ter ratificado, em 1 de janeiro de 1992, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura⁷⁷.

71. Verifica-se que as graves violações de direitos humanos devem ser investigadas e seus responsáveis punidos, acima de qualquer justificativa de prescrição de suas condutas, uma vez que os crimes de tortura são imprescritíveis, ainda que em detrimento da irretroatividade da lei penal, o que não ocorreu no caso das irmãs Quispe, no qual o Estado de Naira se fez inerte.

3.4.5. Da violação ao artigo 7 (liberdade pessoal)

72. A tutela conferida à integridade pessoal se limita a integridade física⁷⁸ o que pode levar, porém à vulneração do direito à vida⁷⁹.

73. O artigo 7 deve ser entendido como a proteção contra toda interferência ilegal ou arbitrária da liberdade física⁸⁰, sinalizando que a detenção já implica em uma situação de vulnerabilidade, agravada quando há ilegalidade ou arbitrariedade⁸¹, o que ocorre no presente caso.

⁷⁴ Ct.IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú, supra nota 30, par. 41.

⁷⁵ Ct.IDH. Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, supra nota 31, pars. 99, 105 e 106.

⁷⁶ Ct.IDH. Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, supra nota 14, par. 141.

⁷⁷ Pergunta de esclarecimento n. 19.

⁷⁸ Ct.IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, par. 52.

⁷⁹ Ct.IDH. Caso Servellón García y otros vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, par. 87.

⁸⁰ Ct.IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, supra nota 88, par. 53.

⁸¹ Ct.IDH. Caso Bulacio vs. Argentina, supra nota 50, par. 127.

74. Tutelar a liberdade não significa impedir a limitação a liberdade pessoal, desde que os Estado adotem medidas apropriadas para proteger e preservar o direito à vida (obrigação positiva) de quem encontra sob sua jurisdição⁸², do qual decorrem todos os demais⁸³, o que pode ser invocado pela proteção contra interferência arbitrária⁸⁴, determinando o controle judicial ávido a contestar a legalidade da detenção (artigo 7.6).⁸⁵

75. Apenas presentes os aspectos formais e materiais, previamente definidos em lei, é possível a restrição da liberdade⁸⁶, obedecendo critérios como: (i) finalidade compatível com a CADH⁸⁷, (ii) idoneidade para cumprir o propósito pretendido⁸⁸, (iii) inexistência de medida menos gravosa para se atingir a mesma finalidade⁸⁹, (iv) proporcionalidade⁹⁰, (v) motivação sobre o cabimento da prisão⁹¹.

76. Deste modo, Naira deve ser responsabilizado pela violação do artigo 7 da CADH.

3.4.6. Da violação aos artigos 8 e 25 da CADH (garantia e proteção judicial) e 7 da CBP

⁸² Ct.IDH. Caso Baldeón García vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, par. 84.

⁸³ Ct.IDH. Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, supra nota 48, par. 124; Ct.IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, supra nota 37, par. 144.

⁸⁴ Ct.IDH. Caso "Instituto de Reeducação del Menor" Vs. Paraguay, supra nota 50, par. 223; Ct.IDH Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229, par. 76

⁸⁵ Ct.IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, par. 51, y Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C No. 275, par. 125.

⁸⁶ Ct.IDH Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2016. Serie C No. 316., Párr 133; Ct.IDH Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994, párr. 47, y Caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, supra, nota a pie de página 201

⁸⁷ Cf. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 103; Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, párr. 312

⁸⁸ Cf. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 93; Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, párr. 312.

⁸⁹ Cf. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, párr. 93.

⁹⁰ Cf. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador, párr. 77.

⁹¹ Cf. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, par. 128.

3.4.6.1. Do acesso à justiça às mulheres indígenas

77. A discriminação contra as mulheres⁹² e LGBTs, e os tratos desumanos das irmãs Quispe⁹³, configuram uma espécie de castigo, ou seja, tortura⁹⁴. Contudo, as denúncias atinentes a tais violações deveriam ser dirigidas aos próprios BMEs⁹⁵, já que o poder se encontrava centralizado nos militares, o que tornava a população submissa às suas ordens⁹⁶, coibindo as denúncias de violações durante a época do conflito⁹⁷, algo de pleno conhecimento do Presidente à época e, igualmente, do Ministério da Justiça e da Defesa⁹⁸.

78. Frise-se que sob a perspectiva de gênero, as obrigações dos artigos 8 e 25 da CADH são implementadas pela CBP, ressaltando-se que o artigo 7.b desta Convenção determina aos Estados prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher.⁹⁹

79. O direito de acesso à justiça compreende obrigação *jure* e de fato¹⁰⁰, determinante para assegurar recursos judiciais adequados ante as violações de direitos humanos.¹⁰¹ E, às mulheres indígenas, o acesso à justiça integra a prevenção, investigação, sanção e ressarcimento das violações de direitos humanos na perspectiva de gênero multidisciplinar no sistema judicial, englobando uma proteção efetiva que leve em consideração suas particularidades, características econômicas, sua especial vulnerabilidade, seus valores e costumes¹⁰², devendo-se tais

⁹² Conforme pergunta de esclarecimento n. 23.

⁹³ Conforme pergunta de esclarecimento n. 50.

⁹⁴ Ct.IDH. Caso Rosendo Cantú y otras vs. México, par. 117.

⁹⁵ Conforme pergunta de esclarecimento n. 55.

⁹⁶ Conforme pergunta de esclarecimento n. 12.

⁹⁷ Conforme pergunta de esclarecimento n. 43.

⁹⁸ Conforme pergunta de esclarecimento n. 36.

⁹⁹ Cfr. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, supra, párr. 193, y Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala, supra, párr. 185

¹⁰⁰ CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de enero de 2007 párr. 5.

¹⁰¹ CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de enero de 2007 párr. 26.

¹⁰² Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 30 de agosto de 2010, Serie C No. 215, Corte IDH. Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, Serie C No. 190, párr. 96.

características serem levadas em conta para superação de eventuais obstáculos.¹⁰³

80. Evidencia-se a importância de tal direito dentro do cenário de discriminação histórica e cultural que vivem as comunidades indígenas, de modo que sua cultura e tradições devem ser distanciadas de qualquer discriminação.¹⁰⁴

81. É dever de Naira afastar das irmãs Quispe as dificuldades geográficas, econômicas, culturais e linguísticas, que costumeiramente afetam comunidades indígenas na América¹⁰⁵, obrigando-se a respeitar medidas do Comitê da CEDAW como: (i) criação de programas para educação jurídica básica geral que levem em conta o analfabetismo das mulheres indígenas¹⁰⁶; (ii) promover campanhas de conscientização jurídica e educação do público a fim de encorajar e capacitar as mulheres¹⁰⁷; (iii) e proporcionar assistência jurídica, eliminando todos os obstáculos que se emanam no caminho das mulheres que recorrem aos tribunais.¹⁰⁸ Instrumentos esses que devem ser efetivos¹⁰⁹.

3.4.6.2. Da intervenção da jurisdição penal militar

82. É dever da República de Naira oportunizar a toda pessoa ser ouvida dentro de um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial.¹¹⁰ De outro lado, o artigo

¹⁰³ Cf. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2010, Serie C No. 216, párrs. 184 e 213

¹⁰⁴ Cf. CIDH, Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, Canadá, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 30/14, 21 de diciembre de 2014, párr. 118

¹⁰⁵ Cf. CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 65, 28 de diciembre de 2011 párr. 199; CIDH, Acceso a la justicia para mujeres víctimas de

violencia sexual en Mesoamérica, OEA Ser.L/V/II. Doc. 63, 9 de diciembre de 2011, párr. 305

¹⁰⁶ Naciones Unidas, Comité de la CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Guatemala, CEDAW/C/HON/CO/6, 12 febrero 2007, párr. 12

¹⁰⁷ Naciones Unidas, Comité de la CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Honduras, CEDAW/C/HON/CO/6, 10 de agosto de 2007, párr.13

¹⁰⁸ Naciones Unidas, Comité de la CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Honduras, CEDAW/C/HON/CO/6, 10 de agosto de 2007, párr.13

¹⁰⁹ Naciones Unidas, Comité de la CEDAW, Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: Argentina, CEDAW/C/ARG/CO/6, 16 de agosto de 2010, par. 15

¹¹⁰ Cf. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C

25.1 da Convenção estabelece a obrigação estatal de oferecer às pessoas submetidas à sua jurisdição, um recurso judicial efetivo¹¹¹, persistindo a obrigação de promover às vítimas de violações de direitos humanos os devidos recursos judiciais (artigo 25), garantindo-se o devido processo legal (artigo 8.1).¹¹²

83. Em tempos de paz, a jurisdição penal militar deve ser restrita e ser destinada à proteção de interesses jurídicos especiais, sendo estes vinculados às funções próprias militares atinente a proteção de bens jurídicos militares¹¹³, não havendo competência para processar autores de violações de direitos humanos¹¹⁴ e prevalecendo a competência da justiça civil¹¹⁵.

84. Tratando-se de crime de estupro¹¹⁶ é incabível intervenção do foro, com base nos precedentes desta Corte IDH¹¹⁷. De outro modo, exsurgem as violações do direito ao juiz natural, devido processo legal e do acesso à justiça.¹¹⁸, já que o juiz deve sempre prezar pela imparcialidade¹¹⁹.

85. Imperioso ressaltar que a participação no processo penal deve ter como escopo a

No. 30, párr. 74; Caso Yvon Neptune vs. Haití, supra nota 49, párr. 79, y Caso Bayarri vs. Argentina, supra nota 123, párr. 101.

¹¹¹ Cfr Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, supra nota 39, párr. 180, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, supra nota 30, párr. 164

¹¹² Cf. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, supra nota 29, párr. 237; Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, supra nota 39, párr. 182, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, supra nota 30, párr. 166

¹¹³ Cf. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. Párr. 172

¹¹⁴ Cf. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 83, párr. 200, y Caso Escué Zapata Vs. Colombia, supra nota 56, párr. 105.

¹¹⁵ Cf. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, supra nota 274, párr. 118; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 142; y, Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia, supra nota 83, párr. 200.

¹¹⁶ Cf. Par. 28 do Caso Hipotético

¹¹⁷ Cf. Caso Cantoral Benavides, nota 111 supra, par. 115; e Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Exceção Preliminar, Mérito, Reparaciones e Custas. Sentença de 20 de novembro de 2009. Série C Nº 207, par. 124.

¹¹⁸ Cf. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra nota 54, párr. 128; Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, supra nota 274, párr. 143, y Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, supra nota 24, párr. 118; Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9.

¹¹⁹ Cfr. Caso Ivcher Bronstein. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 112; Caso 19 Comerciantes, supra nota 274, párr. 167, y Caso Escué Zapata Vs. Colombia, supra nota 56, párr. 101.

respectiva reparação do dano e, em mesmo patamar, fazer efetivo os direitos à verdade e à justiça, ultrapassando a esfera militar¹²⁰, algo que exige do juiz incumbido do julgamento de uma demanda que rechace qualquer preconceito e, do mesmo modo, ofereça garantias objetivas suficientes à sanar todas as dúvidas que o réu ou a comunidade podem suscitar a respeito do juízo.¹²¹

86. No mais, a subordinação hierárquica dos militares aliados à inexistência de inamovibilidade e/ou educação jurídica para atuar em cargo de juiz ou promotor impede a imparcialidade¹²², o que demonstra latente violação aos artigos 8 e 25 da CADH¹²³.

3.4.6.3. Da obrigação de investigar

87. A imparcialidade também se aplica a autoridade pública não judicial¹²⁴, o que inclui a esfera ministerial uma vez que também estão sujeitos às violações das garantias judiciais e proteção judicial.¹²⁵

88. Ademais, a o dever de investigar violações de direitos humanos é uma obrigação de meio e não de resultados¹²⁶ e exige uma conduta comissiva dos Estados, que devem ser adotadas para

¹²⁰ Cf. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. Párr. 175

¹²¹ Cf. Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 56, y Caso Flor Freire Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C No. 315, párr. 168

¹²² Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 155, y Caso Argüelles y otros Vs. Argentina, supra, párr. 149.

¹²³ Cf. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. Párr. 177

¹²⁴ Cf. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74. Párr. 105

¹²⁵ Cf. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. Párr. 175

¹²⁶ Cf. Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, Párrafo 93

garantir os direitos contidos na CADH,¹²⁷ assumida como um dever jurídico próprio, promovendo uma investigação séria, imparcial, justa e efetiva.¹²⁸

89. Sendo assim, no caso das Sras. Maria Helena e Mônica Quispe é cristalina a obrigação de Naira de efetuar investigações e analisar os procedimentos que se vinculam e constituem o pressuposto de um processo judicial, em particular, as tarefas de investigação de cujo resultado depende o início e o avanço do mesmo.¹²⁹

90. Diante desse dever, cientes da ocorrência do fato, as autoridades estatais devem, *ex officio* e sem demora, tomar as providências para uma investigação séria, imparcial e efetiva¹³⁰, o que não ocorreu no presente caso¹³¹.

91. A inexistência de denúncia por parte das vítimas não poderá ser utilizado como escusa da responsabilização de Naira quanto ao seu dever de investigar, na medida em que, tanto o Presidente como o Ministro da Defesa e da Justiça tinham ciência das violações praticadas nas bases militares¹³².

92. A obrigação geral de garantia aos direitos à vida, integridade e liberdade pessoal, deriva da obrigação de investigar os casos de violações desses direitos, isto é, do artigo 1.1 da CADH em conjunto com o direito substantivo que deve ser amparado, protegido ou garantido.¹³³

93. O artigo 7 da CBP impõe aos Estados-Parte a obrigação de tomar as devidas diligências

¹²⁷ Cf. Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 138

¹²⁸ Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212. Párr. 192

¹²⁹ Cf. Caso das "Crianças de Rua" (Villagrán Morales e outros), nota 109 supra, par. 222; Caso Tristán Donoso, nota 117 supra, par. 145; e Caso Garibaldi Vs. Brasil. Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 23 de setembro de 2009. Série C Nº 203, par. 120.

¹³⁰ Cf. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Párr 143

¹³¹ Cf. Párr. 30 do Caso hipotético *in fine*

¹³² Conforme pergunta de esclarecimento n. 36

¹³³ Cf. Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 261, párr. 142; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 115, y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 22, párr. 298.

para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher¹³⁴. Destarte, diante de um ato de violência sistemática contra a mulher, é de suma importância que as autoridades levem as investigações adiante com determinação e eficácia para que assim a violência contra a mulher seja, de fato, erradicada bem como se conquiste a confiança de outras vítimas perante às instituições estatais.¹³⁵

94. Diz o expressamente o Protocolo de Istambul¹³⁶ que os Estados-partes devem garantir que (i) a declaração da vítima seja realizada em um ambiente cômodo e seguro, que lhe conceda privacidade e confiança, (ii) a declaração da vítima seja registrada de forma tal que se evite ou limite a necessidade de sua repetição, (iii) seja oferecido atendimento médico, sanitário e psicológico à vítima, tanto de emergência como de forma contínua se assim for requerido, por meio de um protocolo de atendimento cujo objetivo seja reduzir as consequências do estupro, (iv) seja realizado imediatamente um exame médico e psicológico completo e detalhado por pessoal idôneo e capacitado, preferivelmente do sexo que a vítima indique, oferecendo-lhe que seja acompanhada por alguém de sua confiança, se assim o desejar, (v) sejam documentados e a possível autoria do fato, assegurando outras provas como a roupa da vítima, investigando de forma imediata o lugar dos fatos e garantindo a correta cadeia de custódia, e coordenados os atos investigativos e manejada diligentemente a prova, tomando amostras suficientes, realizando estudos para determinar e (vi) seja oferecido acesso à assistência jurídica gratuita à vítima durante todas as etapas do processo.

¹³⁴ Cf. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216. Párr. 169

¹³⁵ Cf. Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010. Serie C No. 215. Párr. 193

¹³⁶ Cf. Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Protocolo de Istambul, inter alia, nota 36 supra, pars. 67, 77, 89, 99, 101 a 103, 155, 162, 163, 170, 171, 224, 225, 260, 269 e 290; e O.M.S., Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence, inter alia, nota 36 supra, páginas 17, 30, 31, 34, 39 a 44 e 57 a 74.

95. Importante salientar, inclusive, que tais parâmetros também são adotados pela Corte IDH¹³⁷. Da obrigação geral de garantia dos direitos à vida, integridade pessoal e liberdade pessoal, deriva a obrigação de investigar os casos de violações desses direitos, conforme o artigo 1.1 da CADH em conjunto com o direito substantivo a ser amparado, protegido ou garantido.¹³⁸

96. A obrigação de investigar também se depreende em outros instrumentos interamericanos, como por exemplo, a CBP e a CIPPT, contendo o dever de garantir o acesso à justiça, inclusive sob a perspectiva de gênero¹³⁹, o que não foi observado pelo Estado de Naira, deixando inequívoco a sua responsabilidade.

3.4.6.4. Do dano ao projeto de vida

97. Entende-se por dano ao projeto de vida como aquele que, em razão de sua gravidade, impede que a vítima execute os projetos de vida que havia pensado para si¹⁴⁰. Em outros termos, a pessoa tem perda ou grave lesão das oportunidades de desenvolvimento pessoal. Destarte, a existência de uma pessoa é alterada em razão de fatores estranhos a ela, que são impostos de forma injusta e arbitrária¹⁴¹, o que se verifica no caso das irmãs Quispe, vítimas de estupro, evidenciando a responsabilidade de Naira perante esta Honorable Corte IDH.

¹³⁷ Cf. Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. Párr. 502

¹³⁸ Cfr. Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, supra nota 261, párr. 142; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 115, y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela, supra nota 22, párr. 298.

¹³⁹ Corte IDH. Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, Párrafo 222

¹⁴⁰ Cf. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42. Párr. 148

¹⁴¹ Cf. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42. Párr. 150

4. PETITÓRIO

98. *Ex positis*, requer-se a declaração da responsabilidade do Estado no que tange às violações aos artigos 4 (direito à vida), 5 (direito à integridade pessoal), 6 (proibição da escravidão e da servidão), 7 (direito à liberdade pessoal), 8 (garantias judiciais) e 25 (proteção judicial) da CADH e 7 da CBP, sendo obrigado a: (i) utilizar de todos os meios disponíveis, bem como eliminar todo e qualquer obstáculo que venham a impedir ou dificultar as investigações dos fatos e o desenvolvimento de processos judiciais, (ii) incluir nas investigações uma perspectiva de gênero, de modo que sejam empreendidas linhas de específicas em relação à violência sexual, considerando os padrões respectivos da região, (iii) realizar as investigações nos moldes dos protocolos manuais internacionais de proteção aos direitos humanos, como o Protocolo de Istambul, (iv) fornecer regularmente informações às familiares e às vítimas sobre os avanços e resultados das investigações, dando-lhes pleno acesso aos autos e (v) incumbir profissionais qualificados em situações de discriminação e violência de gênero para realizar os atos investigativos.

99. Dentro de um prazo razoável, também deverá investigar, por meio de instituições públicas competentes, os agentes estatais envolvidas nas violações de gênero na BME, inclusive àquelas referentes às irmãs Quispe e aplicar as devidas sanções na medida da responsabilidade quanto ao dano proporcionado.

100. Diante da responsabilização por esta Corte IDH, incumbirá ao Estado de Naira publicar o teor da sentença no Diário Oficial da Federação, em um jornal de ampla circulação nacional, em um jornal de ampla circulação na Província de Warmi e também em um sítio web oficial do Estado.

101. O Estado deverá, no prazo de um ano a partir da notificação da Sentença, realizar um ato

público de reconhecimento de responsabilidade internacional em relação aos fatos do presente caso e erigir um monumento em honra à memória das mulheres vítimas de violência de gênero em Warmiti, na qual o Estado reconheça publicamente sua responsabilidade internacional.

102. O Estado deverá, em um prazo razoável, continuar com a padronização de todos os seus protocolos, manuais, critérios de investigação, serviços periciais e de aplicação de justiça, utilizados para investigar todos os crimes que sejam relacionados à violência sexual e homicídios de mulheres, em conformidade com o Protocolo de Istambul e os padrões, com base em uma perspectiva de gênero. A esse respeito, deverá ser apresentado um relatório anual durante três anos.

103. Por último, o Estado também estará obrigado a realizar pagamentos com fins indenizatórios em relação às vítimas Mônica e Maria Helena Quispe.